

Rancagua, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

Comparece el abogado MANUEL ANDRÉS ACUÑA PEÑALOZA en representación de la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE, quien deduce recurso de nulidad contra la sentencia definitiva dictada con fecha 30 de abril del año 2021 por el Juez del Juzgado de Letras de Peralillo, en sus antecedentes RIT O-3-2021, que acogió parcialmente la demanda de despido injustificado interpuesta por don Francisco Correa Lizana.

Interpone su recurso fundado de manera principal, en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

También deduce como motivo de nulidad, el previsto en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, es decir, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, sin señalar si las causales las incoa de manera conjunta o subsidiaria, tal como lo ordena el inciso final del artículo 478 del código del ramo.

En la audiencia de la vista del recurso, los abogados de las partes alegaron por las pretensiones de sus representados, hechas valer en estos antecedentes. Finalizadas las exposiciones de los intervinientes se puso término al debate, quedando la causa en estado de alcanzar acuerdo y, producido éste, se procede a dictar el siguiente fallo.

**Considerando:**

**Primero:** Que, como antecedente previo al análisis de las causales de nulidad alegadas en el recurso, es necesario tener en cuenta que el actor Francisco Andrés Correa Lizana interpone demanda por despido injustificado y cobro de indemnizaciones en contra de la Ilustre



Municipalidad De Marchigüe, institución a la que entró a trabajar con fecha 7 de marzo del 2001, en virtud de un contrato por tiempo indefinido, para integrar la Dotación Docente de la comuna de Marchigüe, en el establecimiento Escuela G-348, Rinconada de Alcones, en el cargo de Docente Titular de Enseñanza Básica. Se desempeñó como docente por aproximadamente 13 años, siendo transferido a la Biblioteca Municipal el año 2014.

Señala que el 21 de diciembre del 2020 se le comunica el término de su contrato de trabajo a partir del 1 de febrero del año 2021, debido a que fue condenado por el Juzgado de Garantía de Pichilemu, en causa RIT 778-2018, a trescientos días de presidio menor en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión para cargos u oficios públicos durante el tiempo de condena, por su responsabilidad a título de autor en el delito de ofensas al pudor, previsto y sancionado en el artículo 373 del Código Penal, concediéndosele la pena sustitutiva de Remisión Condicional.

**Segundo:** Que, luego, en cuanto al primer vicio de nulidad reclamado por la demandada, referido a la infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica sostiene que, para acreditar la justificación normativa y fáctica del despido por la causal contenida en el numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito ofrecieron e incorporaron la sentencia expedida por el Juzgado de Garantía de Pichilemu y la posterior confirmación de dicho fallo por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, elemento que es gravitante para justificar el despido.

Dice que, a través de dicha sentencia, la condena al profesor Correa es un hecho público, notorio y de connotación pública, vox populi, acontecimientos que fueron ventilados incluso por medios de prensa provinciales.



Agrega que la causal del Código del Trabajo se concordó con la de la letra i del artículo 72 del Estatuto Docente, ya que para la Municipalidad, evidentemente había un cambio en las circunstancias que originaron la contratación del demandante, en relación con la situación derivada de la decisión jurisdiccional del Juzgado de Garantía de Pichilemu, en que el actor fue condenado por un delito de connotación sexual, donde la víctima fue un menor de edad.

**Tercero:** Que, en cuanto al segundo motivo de nulidad deducido por la parte demandada, referido al previsto en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, es decir, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, señala que el despido y terminación del contrato no es una decisión que se haya manifestado a la deriva o con falta de fundamentación, todo lo contrario, una vez habiendo tomado conocimiento de dicha sentencia, la Municipalidad de Marchigüe suspendió la remuneración del demandante por el tiempo que señalaba la resolución del Juzgado de Garantía de Pichilemu, esto es, mientras se extendía la pena accesoria y; acto seguido, se decide finalmente poner término a dicho contrato, puesto que no existían las mismas circunstancias originarias del contrato, ello en referencia al artículo 72 letra I del Estatuto Docente.

En tal sentido, señala que se han probado los elementos que constituirían el caso fortuito o fuerza mayor y, en consecuencia, el sentenciador de primera instancia yerra en tal fallo al declarar que el despido es injustificado, pues a todas luces, la calificación jurídica de los hechos probados, debió haber llevado al tribunal a la conclusión que el despido fue absolutamente justificado y ajustado a la norma.

**Cuarto:** Que, cabe hacer presente que el recurrente interpone dos causales de nulidad sin indicar si las



deduce de manera conjunta o subsidiaria. Primero alega la prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y; luego deduce el motivo de nulidad establecido en el literal c) del artículo 478 del mismo código, en cuanto la sentencia puede ser anulada cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

La primera de las causales busca corregir o modificar los hechos determinados en la sentencia, reclamando que en su fijación se infringieron las reglas de la sana crítica. La segunda en cambio, implica la aceptación de los hechos tal y como fueron determinados por el sentenciador a quo, por lo que sólo se busca a través de su interposición la correcta aplicación de la ley.

En tal contexto, por una parte el recurrente pide a esta Corte que en virtud de la causal planteada altere los hechos y; por la otra, que los mantenga, operación que evidentemente resulta contradictoria e imposible de ejecutar, si se tiene en cuenta que el impugnante no señala la forma en que deduce las causales, tarea que esta Corte, dada la naturaleza de derecho estricto del recurso, no puede subsanar, circunstancia que resulta suficiente para rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada Ilustre Municipalidad De Marchigue.

**Quinto:** Que, no obstante lo anterior, en relación a la causal de nulidad prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, cabe precisar que la causal alegada ataca el proceso de reflexión que ha utilizado el juez para llegar a su conclusión o decisión. En efecto, el sistema de valoración de la prueba basado en la sana crítica descansa en un método racional, donde el juez,



sin perjuicio que no tiene prefijados el peso, ponderación y jerarquización de los medios de prueba, no es absolutamente libre para decidir, puesto que se encuentra limitado conforme lo dispone el artículo 456 del Código del Trabajo, por las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos o técnicos.

Por lo tanto, al cuestionarse por el recurrente el proceso de valoración de la prueba llevado adelante por el sentenciador del grado, debe indicar -como sostenidamente lo ha señalado esta Corte-, cuál de las reglas referidas ha sido infringida, cómo lo han sido y cuál es su influencia en lo dispositivo del fallo.

**Sexto:** Que, al efecto, del análisis del libelo recursivo es posible constatar que el recurrente sólo se limita a hacer protestas generales y a plantear su propia valoración de los antecedentes por él indicados, sin ser capaz de identificar las reglas de la sana crítica supuestamente vulneradas, sin detallar si son los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos asentados, menos aún, ha cumplido con el deber de señalar de qué manera esas reglas han sido violentadas y cómo han influido en lo dispositivo del fallo, lo que imposibilita a esta Corte, dada la naturaleza estricta del recurso, para acoger en este aspecto la impugnación deducida.

**Séptimo:** Que, en cuanto a la causal de nulidad relacionada con la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, cabe tener presente que la causal en comento se aplica a aquellas normas que contienen entre sus elementos presupuestos o conceptos indeterminados que requieren ser llenados de contenido por el juzgador, a fin de dilucidar si los hechos que se han tenido por acreditados encuadran en la calificación jurídica de la norma en cuestión.

En este sentido la doctrina ha señalado que sus presupuestos "no están constituidos sólo por aspectos



puramente descriptivos, de forma que la consecuencia jurídica aparece determinada por ciertos términos o nociones que emplea el legislador para flexibilizar la regla legal, haciéndola adaptable a las múltiples situaciones que aporta la realidad o a los cambios que frecuentemente experimentan las relaciones en sociedad" (Omar Astudillo C., "El Recurso de Nulidad Laboral. Algunas consideraciones técnicas", Editorial Legal Publishing Chile, año 2012, pág. 135).

**Octavo:** Que, en la especie, el recurrente reclama que el tribunal yerra al no considerar concurrente la causal de despido por fuerza mayor o caso fortuito, prevista en el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, en virtud de los hechos acreditados en la causa.

**Noveno:** Que, al efecto, es importante tener presente que son hechos probados y, además, no discutidos que:

a) El demandante don Francisco Andrés Correa Lizana comenzó a trabajar para la demandada Ilustre Municipalidad de Marchigue, con fecha 7 de marzo del 2001.

b) El 21 de diciembre del 2020, se le comunica el término de su contrato de trabajo a partir del 1 de febrero del año 2021.

c) La causal de despido invocada es la establecida en el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo y 72 Letra i) de la Ley 19.070.

d) Los hechos que fundan la causal son "el no cumplimiento de requisitos que se exigen a fin de seguir prestando servicios en calidad de funcionario público, teniendo en cuenta lo indicado en Sentencia del Juzgado de Garantía de Pichilemu, en causa RIT 778-2018, en que don Francisco Correa Lizana fue condenado a trescientos días de presidio menor en su grado mínimo, más accesoria de suspensión para cargos u oficios públicos durante el tiempo de condena por su responsabilidad a título de autor y en grado de ejecución consumado del delito de ofensas al pudor, delito previsto y sancionado en el



artículo 373 del Código Penal, acontecido en esta jurisdicción de Pichilemu en el 2018".

e) La pena impuesta fue omitida y eliminada del registro pertinente en conformidad al artículo 38 de la Ley 18.216.

**Décimo:** Que, el sentenciador, para resolver que el despido del actor fue injustificado, tuvo en consideración en el motivo Noveno de su sentencia que: *"si bien, fue condenado por sentencia firme, en el numeral III de la misma, se ordenó oficiar al Registro Civil e Identificación, para la aplicación del artículo 38 de la ley 18.216, que implica la omisión en su certificado de antecedentes respecto de la condena, acompañándose por la demandante certificado de antecedentes de fecha 19 de febrero de 2021, que lo ratifica.*

*Que atendido el mérito de los antecedentes el demandante se ha visto beneficiado por la aplicación de la referida norma que, precisamente uno de sus objetivos es la protección del trabajo, por lo anterior no resulta justificada las causales aplicadas, esto es, la del artículo 159 N° 6, del Código del Trabajo y la del artículo 72 letra I del Estatuto Docente."*

**Undécimo:** Que, el artículo 38 antes citado establece en lo pertinente que: *"La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto (...).*

*(...)El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el*



*inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuarios. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación."*

**Duodécimo:** Que, el sentenciador, teniendo en cuenta que la norma en comento permite omitir y luego eliminar para todos los efectos legales y administrativos los antecedentes prontuarios, concluyó que no pudo la demandada despedirlo por aquellos antecedentes, afirmando que las causales esgrimidas por la demandada son injustificadas.

**Decimotercero:** Que, al respecto, es orientador lo dispuesto en el último inciso del señalado artículo 38 que establece *"Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal."*

El inciso transcrito no considera procedente el beneficio otorgado en el artículo 38 para el caso de las instituciones ahí señaladas, entre las cuales no se encuentran las Municipalidades, por lo que, a contrario sensu, respecto de ellas, las personas que se encuentren en tal situación no se les podrá considerar las penas que se les impongan para todos los efectos legales y administrativos, entre ellos los requisitos de ingreso y permanencia en la administración pública relacionada con las instituciones no exceptuadas, por lo demás mal podría una sentencia judicial constituir un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que autorice a la demandada a poner término al contrato de trabajo.

**Decimocuarto:** Que, en el mismo sentido lo ha resuelto la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 011172N20 de 5 de agosto de 2020, al explicar que *"A partir de esta última norma, la jurisprudencia*





administrativa de esta Entidad de Control contenida, entre otros, en el dictamen N° 20.910, de 2018, ha manifestado que quien ha sido favorecido por sentencia ejecutoriada con alguno de los beneficios contemplados en la ley N° 18.216, y no ha sido condenado previamente por crimen o simple delito, goza del beneficio de la omisión de antecedentes penales, por lo que debe ser considerado, para todos los efectos legales y administrativos, como si no hubiese sufrido condena alguna.

Por ello, las personas o empleados de las entidades de la Administración que han sido favorecidos con la omisión de antecedentes penales se consideran como si no hubiesen sufrido condena alguna en lo referente al cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en los organismos de la Administración del Estado, respectivamente (aplica criterio contenido en el dictamen N° 77.312, de 2016)".

**Decimoquinto:** Que, en consecuencia, no obstante que aparece del todo razonable la decisión adoptada por la autoridad edilicia, la Ley 18.216 introduce un elemento favorecedor del demandante que en concepto de estos sentenciadores no es posible soslayar, por lo que no habiendo antecedentes que puedan derivar en una nulidad del fallo, tanto por sus defectos formales como de fondo, el recurso será desestimado.

Con lo razonado y lo dispuesto en los artículos 474, 478, 479, 480, 481 y 482 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

**I.-** Que, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por el abogado Manuel Andrés Acuña Peñaloza en representación de la demandada, contra la sentencia definitiva dictada con fecha 30 de abril del año 2021 por el Juez del Juzgado de Letras de Peralillo, en sus antecedentes RIT 0-3-2021 y, en consecuencia, **no es nula**.

**II.-** Que, no se condena en costas al recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.



Acordado el rechazo del recurso con el voto en contra del Ministro Sr. Caro, quien fue de parecer acogerlo por el motivo de invalidación previsto en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por cuanto en su concepto y con independencia de que la Municipalidad haya invocado la causal del artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, lo cierto es que también se invocó la causal específica de término de la relación laboral de los profesionales de la educación, contemplada en el artículo 72 letra i) del Estatuto Docente, cual es la de pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente, supuesto que se encuentra demostrado en autos desde que se estableció que durante la vigencia de la relación laboral, el docente y demandante Francisco Andrés Correa Lizana fue condenado como autor del delito previsto en el artículo 373 del Código Penal, generándose así la inhabilidad establecida en el artículo 4 del Estatuto Docente, norma que dispone: "Sin perjuicio de las inhabilidades señaladas en la Constitución y la ley, no podrán ejercer labores docentes quienes sean condenados por alguno de los delitos contemplados en las leyes Nos 20.000, con excepción de lo dispuesto en su artículo 4°, 20.066 y 20.357, y en los párrafos 1, 2, 5, 6 y 8 del Título VII; en los párrafos 1 y 2, en los artículos 395 a 398 del párrafo 3 y en el párrafo 5 bis del Título VIII, y en los artículos 433, 436 y 438 del Título IX, todos del Libro Segundo del Código Penal, y los que se encontraren inhabilitados de acuerdo al artículo 39 bis del mismo Código".

En concepto del disidente, estas normas previstas en el Estatuto Docente tienen el carácter de especial y por ello deben aplicarse con preferencia a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216, sobre todo porque esta última disposición legal regula la omisión de la condena en el extracto de filiación en tanto las primeras tratan un asunto diverso, cual es el término de la relación laboral del docente que, durante su vigencia, es



condenado por alguno de los delitos que señala el artículo 4 del Estatuto Docente, dentro de los cuales se encuentran los establecidos en el párrafo 8 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, supuesto que puede ser demostrado válidamente con la sentencia ejecutoriada dictada en el respectivo proceso penal y que se tuvo por acompañada en esta causa, tal como se consigna en el motivo cuarto de la sentencia recurrida.

Dicho de otro modo, la omisión de la condena en el extracto de filiación y antecedentes penales no privaba a la Municipalidad demandada de poner término a la relación laboral del docente que ha sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada, por cuanto, por una parte, ello resulta obligatorio para el municipio, según se colige de los términos imperativos del artículo 72 letra i) en relación con el artículo 4, ambos del Estatuto Docente, dado que el primero de ellos utiliza la voz "dejarán de pertenecer a ella", en tanto el segundo emplea el vocablo "no podrán ejercer labores docentes quienes sean condenados". Por otra parte, si bien el inciso final del artículo 38 de la Ley 18.216, exceptúe la omisión de la condena en el certificado de antecedentes, sólo para el caso del ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal, ello sólo permite concluir, en el mejor de los casos que la condena del docente no podrá ser considerada para los efectos de su incorporación a una nueva dotación docente, pero en ningún caso justifica que no se pueda considerar la condena para poner término a una relación laboral.

En base a tales consideraciones, el Ministro Sr. Caro consideró que la sentencia ha incurrido en una errónea calificación jurídica de los hechos, por cuanto ha estimado que el despido del actor es injustificado no obstante concurrir a su respecto una clara y patente causal de terminación de la relación laboral docente,



alegada oportunamente por el Municipio demandado al dictar el Decreto Alcaldicio N° 4373 de 21 de diciembre de 2020, por el cual se puso término al contrato que vinculaba al demandante con la Municipalidad de Marchigue, todo lo cual ameritaba el rechazo de la demanda.

Regístrese, comuníquese.

Redacción del Ministro don Michel González Carvajal y del voto en contra su autor.

**Rol Corte 404-2021-Reforma Laboral.**



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Michel Anthony Gonzalez C. y Abogada Integrante Maria Latife A. Rancagua, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

